Distr.
GENERAL

E/CN.4/1994/51
24 de enero de 1994

Original: ESPAÑOL

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
50° período de sesiones
Tema 12 del programa provisional

CUESTION DE LA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES
FUNDAMENTALES EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO, Y EN PARTICULAR
EN LOS PAISES Y TERRITORIOS COLONIALES Y DEPENDIENTES

Informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba,
presentado por el Relator Especial, Sr. Carl-Johan Groth,
en cumplimiento de la resolución 1993/63 de la Comisión

INDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
I. INTRODUCCION	1 - 5	3
II. LOS DERECHOS CIVILES Y POLITICOS	6 - 42	4
A. Marco legal y constitucional	9 - 15	5
B. Modalidades más frecuentes de violaciones y grupos especialmente vulnerables	16 - 34	7
C. El derecho a salir y entrar al país	35 - 42	18
III. LA SITUACION EN LAS PRISIONES	43 - 46	20
IV. CONSIDERACIONES EN TORNO AL DISFRUTE DE LOS DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES	47 - 58	22
V. INFORMACION RECIBIDA DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES CON SEDE EN CUBA DE ACUERDO CON LA LEGISLACION VIGENTE	59 - 64	25

INDICE (continuación)

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	65 - 75	28

Apéndices

I. Carta de fecha 24 de agosto de 1993 dirigida al Representante Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra por el Relator Especial		33
II. Discurso pronunciado con fecha 29 de noviembre de 1993 por el Representante Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas en el curso del 48° período de sesiones de la Asamblea General . .		34

I. INTRODUCCION

1. En el curso de su 49º período de sesiones la Comisión de Derechos Humanos adoptó la resolución 1993/63, de 10 de marzo de 1993, titulada "Situación de los derechos humanos en Cuba". Por esta resolución la Comisión decidió prorrogar durante un año más el mandato confiado al Relator Especial según los términos de la resolución 1992/61, de 3 de marzo de 1992, y en base a la cual el Sr. Carl-Johan Groth fue nombrado Relator Especial.

2. La resolución 1993/63, aprobada por el Consejo Económico y Social por su decisión 1993/274, pidió al Relator que presentara un informe a la Comisión en su 50º período de sesiones, así como un informe provisional que fue presentado a la Asamblea General en su cuadragésimo octavo período de sesiones (A/48/562). Por su parte, la Asamblea General adoptó la resolución 48/142 titulada "Situación de los derechos humanos en Cuba" por la que decidió continuar la consideración de este tema en el 49º período de sesiones. El presente informe constituye básicamente una puesta al día del informe provisional.

3. La resolución 1993/63 también pidió al Relator Especial que mantuviera contacto directo con el Gobierno y los ciudadanos de Cuba, al tiempo que, tomando nota de que el Gobierno de Cuba no había cooperado con el Relator, pidió a aquél que diera al Relator Especial la oportunidad de cumplir plenamente su mandato, en particular permitiéndole visitar Cuba.

4. En cumplimiento de su mandato el Relator Especial dirigió, con fecha 24 de agosto de 1993, una carta al Representante Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra solicitando la colaboración de su Gobierno y la oportunidad de visitar el país. Dicha carta, cuyo texto figura en el apéndice I al presente informe, ha permanecido hasta ahora sin respuesta.

5. En cumplimiento igualmente de su mandato el Relator Especial trató de obtener información sobre la situación de derechos humanos en Cuba de un amplio y variado número de fuentes, y mostró su disponibilidad para recibir a toda persona o grupo que deseara reunirse con él. Con este fin y, teniendo en cuenta que la mayor parte de las fuentes de información sobre el tema se encuentran en los Estados Unidos, viajó a Nueva York y Washington entre los días 15 a 22 de septiembre de 1993, donde tuvo la oportunidad de reunirse con individuos y representantes de las siguientes organizaciones y grupos: Comité Cubano pro Derechos Humanos, Comité de Apoyo al Movimiento de Derechos Humanos en Cuba, Fundación de la Mujer Cubana, Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Freedom House, Unión Sindical de Trabajadores de Cuba, Americas Watch, Revista Areíto, Comité Cubano Americano de New Jersey, Partido Demócrata Cristiano de Cuba, Federación Mundial de Presos Políticos Cubanos, Partido pro Derechos Humanos de Cuba, Centro de Derechos Humanos, Comité Cubano contra el Bloqueo, Grupo Puertorriqueño contra el Bloqueo e Inter-American Dialogue. El Relator Especial celebró igualmente una sesión de trabajo en Madrid el día 24 de septiembre donde tuvo oportunidad de reunirse con representantes de la Asociación por la Paz Continental (ASOPAZCO), la Unión Liberal Cubana y un grupo de 13 ex prisioneros cubanos asilados en España. Durante el año en curso el Relator Especial tuvo también la oportunidad de reunirse con

representantes de la Coordinadora de Organizaciones de los Derechos Humanos en Cuba, y recibió material escrito, además de las fuentes indicadas, de otras tales como el Buró de Información del Movimiento Cubano de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, así como numerosas comunicaciones enviadas al Relator por ciudadanos cubanos residentes en Cuba.

II. LOS DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

6. Al analizar la información recibida sobre la situación de los derechos humanos el Relator Especial ha tomado como punto de referencia los instrumentos internacionales pertinentes y, de manera especial, desea tener presente algunos párrafos de la Declaración y Programa de Acción de Viena aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993 1/. En primer lugar, la Conferencia reafirmó, en el párrafo 1 de la primera parte de la Declaración "el solemne compromiso de todos los Estados de cumplir sus obligaciones de promover el respeto universal, así como la observancia y protección de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, otros instrumentos relativos a los derechos humanos y el derecho internacional. El carácter universal de esos derechos y libertades no admite dudas".

7. Por su parte el párrafo 5 afirma que:

"Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales."

Por último, el párrafo 8 establece que:

"La democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente. La democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural, y en su plena participación en todos los aspectos de la vida. En este contexto, la promoción y protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional deben ser universales y llevarse a cabo de modo incondicional. La comunidad internacional debe apoyar el fortalecimiento y la promoción de la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el mundo entero."

8. La lectura de estas disposiciones le sugieren al Relator Especial las siguientes reflexiones. El sistema político, cualquiera que sea, imperante en un Estado no debe subsistir a costa de conculcar sistemáticamente, en relación con sus propios ciudadanos, derechos humanos y libertades fundamentales que han sido definidos en instrumentos internacionales. Además, la interpretación de estos derechos no puede ser patrimonio exclusivo de las autoridades estatales ni de gobiernos monolíticos que monopolizan la canalización de los supuestos intereses de distintos sectores de la sociedad. Por otro lado, el Relator Especial estima que los progresos en el campo económico y social constituyen una base positiva para lograr avances en el campo de los derechos civiles y políticos. Ahora bien, como recoge la Declaración y Programa de Acción de Viena, los progresos realizados en un sector de los derechos humanos, en concreto en el campo de los derechos económicos y sociales, no pueden servir de justificación a deficiencias graves en la protección y promoción de otra categoría de derechos como son los civiles y políticos. Dada su indivisibilidad los progresos en ambos sectores deben ser paralelos so pena de que aquellos a los que se ha dado prioridad se vean a largo plazo menoscabados por los que han sido menospreciados.

A. Marco legal y constitucional

9. Algunas disposiciones de la Constitución en vigor resultan claves para poder comprender el contexto dentro del cual se sitúan los derechos civiles y políticos. El artículo 1 proclama que "Cuba es un Estado socialista de trabajadores" y el artículo 5 establece que "El Partido Comunista de Cuba, marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista". Según el artículo 62 "Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible".

10. Si bien el texto constitucional contiene varias disposiciones destinadas a garantizar derechos básicos tales como la libertad de palabra y prensa (art. 53), los derechos de reunión, manifestación y asociación (art. 54) o el derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades (art. 63) de su redacción se infiere que éstos solamente pueden ser ejercidos cuando ello no implique cuestionar, a juicio de las autoridades, el sistema actual y la ideología oficial.

11. Conviene mencionar también en este contexto los preceptos constitucionales reguladores de las organizaciones de masas. El artículo 6 establece que "la Unión de Jóvenes Comunistas, organización de la juventud cubana de avanzada, cuenta con el reconocimiento y el estímulo del Estado en su función primordial de promover la participación activa de las masas juveniles en las tareas de la edificación socialista". Asimismo el artículo 7 estipula que "el Estado socialista cubano reconoce y estimula a las organizaciones de masas y sociales... que agrupan en su seno a distintos sectores de la población,

representan sus intereses específicos y los incorporan a las tareas de la edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista". Estos preceptos establecen sin duda el marco ideológico dentro del cual pueden crearse nuevas asociaciones. Aquellas que, a juicio de las autoridades, no respondan a esta concepción se verán rechazar su inscripción en el registro correspondiente o, como sucede más a menudo en la práctica, se ignorará su solicitud de inscripción.

12. Corolario lógico de estos preceptos constitucionales lo constituye la sanción de todas aquellas conductas que de algún modo puedan ir en contra del sistema vigente. El Código Penal de 1987 establece así entre sus objetivos "contribuir a formar en todos los ciudadanos la conciencia del respeto a la legalidad socialista, del cumplimiento de los deberes y de la correcta observancia de las normas de convivencia socialista" (art. 1). Además especifica que "la sanción no tiene sólo por finalidad la de reprimir por el delito cometido, sino también la de reeducar a los sancionados en los principios... de respeto a las normas de la convivencia socialista" (art. 27). A continuación, el Código tipifica una serie de conductas como delitos contra la seguridad interior del Estado y los sanciona con elevadas penas de privación de libertad. Además el artículo 44 establece que la sanción de confiscación de bienes la aplica el tribunal a su prudente arbitrio en los delitos contra la seguridad del Estado. Algunos de estos delitos, como la rebelión o la sedición presuponen el empleo de la violencia o la fuerza armada. Otros, sin embargo, no presuponen la utilización de ningún medio violento, como el delito de propaganda enemiga que sanciona, entre otros, a todo aquel que incite contra el orden social o el Estado socialista mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra forma, o que confeccione, distribuya o posea propaganda de ese carácter. Además, según el artículo 12, en los delitos contra la seguridad del Estado los actos preparatorios son también sancionables. El Código tipifica también en su artículo 72 el "estado peligroso" definiéndolo como "la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista" y prevé que el que por sus vínculos o relaciones con personas potencialmente peligrosas para el orden social, económico y político del Estado socialista pueda resultar proclive al delito será objeto de advertencia por la autoridad policial. El Código establece también que al declarado en estado peligroso se le pueden imponer medidas de seguridad predelictivas, consistentes, entre otras, en la vigilancia por los órganos de la Policía Nacional Revolucionaria.

13. Otros delitos tipificados en el Código Penal son también susceptibles de aplicarse a conductas que de alguna manera supongan la expresión de opiniones críticas de la ideología oficial o de la actuación de las autoridades, tales como los delitos de asociación, reunión y manifestación ilícita (arts. 208 y 209 que sancionan al que pertenezca como asociado o afiliado a una asociación no inscrita así como a sus promotores o directores), clandestinidad de impresos (art. 210) o desacato (art. 144).

14. El Relator Especial considera ilustrativo en este punto mencionar las conclusiones provisionales del fiscal en el juicio seguido contra Sebastián Arcos Bergnes, dirigente del Comité Cubano pro Derechos

Humanos 2/, en octubre de 1992 por el delito de propaganda enemiga para mostrar el tipo de conductas susceptibles de ser sancionadas:

"Que Sebastián Arcos Bergnes, sin respetar las leyes, ha enviado informaciones a emisoras radicadas en el exterior del país, con el propósito de contribuir a la campaña de descrédito contra Cuba.

Que, violando las normas disciplinarias del Penal Combinado del Este, remitió notas manuscritas a reclusos contrarrevolucionarios, para contribuir a la excitación de los ánimos contra el sistema social cubano.

Que en requisita efectuada en el Combinado del Este el 11 de diciembre de 1991, le ocuparon al recluso... fragmentos de papel manuscritos con tinta, en uno de los cuales... el acusado Sebastián Arcos Bergnes refería textualmente: "Hacemos continuos planteamientos de cambios democráticos al régimen, y tratamos de ir creando la conciencia nacional necesaria para lograr esos cambios mediante la resistencia cívica, pacífica, pero firme, de la población. Esta es nuestra tarea principal, educativa, actual... luego reclamar almuerzo, transporte, turismo; luego amnistía, libertad de expresión, de asociación y, al final ¡democracia!". Es decir, promocionar, mediante la propaganda sistemática, la ejecución de acciones contrarias a nuestro sistema social."

15. El Relator Especial no considera dentro de su mandato emitir opiniones con respecto a los principios ideológicos inscritos en la Constitución. Sus comentarios se centran en las limitaciones que tienen para los derechos básicos de la población la interpretación y aplicación de esos principios por parte de las autoridades.

B. Modalidades más frecuentes de violaciones y grupos especialmente vulnerables

16. El Relator Especial ha podido apreciar, a través de testimonios directos así como de contactos con analistas de la realidad cubana y de abundante documentación escrita, el excesivo control ejercido sobre la población a través del aparato institucional, resultando ello en una conculcación sistemática entre otros del principio de no discriminación por razones políticas y del derecho a la libertad de opinión y expresión. Este control se ejerce en la vida cotidiana de cada ciudadano a través de los centros de trabajo, los centros de estudio o el mismo vecindario. La educación misma está también condicionada por la ideología oficial, como se desprende de la Constitución, cuyo artículo 38 establece que los padres tienen el deber de contribuir activamente a la educación y formación integral de sus hijos como ciudadanos útiles y preparados para la vida en la sociedad socialista, mientras que el artículo 39 indica que el Estado fundamenta su política educacional y cultural en el ideario marxista y promueve la educación patriótica y la formación comunista de las nuevas generaciones.

17. Según la información recibida, por medio de los llamados "expediente acumulativo del escolar" y "expediente laboral" se sigue un control sobre la integración ideológica del individuo prácticamente a lo largo de toda su vida,

al constar en ellos no sólo los aspectos puramente académicos o laborales sino también información relativa a su pertenencia a las organizaciones de masas, funciones efectuadas dentro de ellas, grado de militancia, aspectos ideológicos relativos a los miembros de la familia, faltas cometidas, etc. En muchos casos el individuo puede verse expulsado de su centro de estudio, o perder su empleo, o sufrir algún tipo de discriminación por haber manifestado de alguna manera opiniones divergentes de la ideología oficial.

18. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo ha examinado algunas de estas cuestiones en el marco de la aplicación del Convenio N° 111: Discriminación: empleo y ocupación, ratificado por Cuba en 1965, a la vista de los comentarios formulados por organizaciones no gubernamentales alegando prácticas discriminatorias fundadas en la opinión política en el acceso a la educación, la formación y el empleo. Siendo esta Comisión un órgano con el que el Gobierno ha mantenido un diálogo, el Relator Especial considera importante hacer amplia referencia a su consideración del caso cubano.

19. Entre otras observaciones la Comisión de Expertos señaló en 1992 que el reglamento para la aplicación de la política del empleo así como el Código de Trabajo definen el expediente laboral como un documento que contiene los datos y los antecedentes de la experiencia laboral de cada trabajador y que el organismo empleador tiene la obligación de establecer, de actualizar y de conservar. Ahora bien, según la resolución N° 590/80 del Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social, en el mismo pueden incluirse las distinciones que no constituyen un mérito laboral, sino que las otorgan organismos como organizaciones de masas o instituciones oficiales y que son expresivas de la "actitud revolucionaria que realiza el trabajador fuera de su centro laboral". La Comisión de Expertos consideró que estas disposiciones legales no están en conformidad con las disposiciones del Convenio relativas a la eliminación de toda discriminación basada en la opinión política y que la inclusión en el expediente laboral de distinciones conferidas por una "actitud revolucionaria" fuera del centro laboral podría constituir una discriminación 3/.

20. En su informe de 1993 la Comisión de Expertos tomó nota de la información comunicada por el Gobierno en el sentido de que los Ministerios de Educación y Formación Superior han emprendido estudios para eliminar de los expedientes acumulativos escolares de los alumnos todo elemento que no se refiera a cuestiones de enseñanza y que se está examinando un proyecto de reglamento sobre la aplicación de la política de empleo en el cual se define el contenido del expediente acumulativo laboral y que indicará claramente que no deberá contener información sobre méritos o deméritos. Además el Gobierno señaló que la resolución N° 590/80 había sido derogada y que el Gobierno está realizando una encuesta sobre reglamentos internos establecidos por algunas empresas para eliminar de los registros toda información que se relacione con la moral o la conducta social de los trabajadores que sea ajena a la relación de empleo 4/.

21. Con respecto a los medios de comunicación el ya mencionado artículo 53 de la Constitución establece que las condiciones materiales para el ejercicio de la libertad de palabra y prensa están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de

propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada. Sobre esta base es indudable que las autoridades ejercen un estricto control de dichos medios y que la censura es practicada de manera sistemática. La citada Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones se refirió también, en su informe de 1993 a la posible discriminación por razones ideológicas de los periodistas, señalando en particular lo siguiente:

"En anteriores solicitudes directas, la Comisión había tomado nota de que el artículo 3 de la resolución N° 50, de 21 de septiembre de 1987, relativa a los criterios para evaluar el rendimiento de los periodistas, incluía el alcance político-ideológico de la actividad realizada. La Comisión había observado que el resultado de la evaluación influía el nivel salarial de los trabajadores en cuestión, dado que si la evaluación no era "positiva" resulta en una disminución del salario de los trabajadores... Por su parte el artículo 28 dispone que después de dos evaluaciones bianuales no positivas, la relación de empleo de la persona así evaluada puede ser rescindida. La Comisión toma nota de que según la respuesta del Gobierno, el trabajo de los periodistas se evalúa únicamente en función de sus calificaciones y del resultado de su trabajo. Sin embargo, dado que el texto de esta resolución menciona elementos ideológicos y políticos y que pueden afectar el acceso al empleo, la seguridad en el empleo y las condiciones de empleo, la Comisión pide al Gobierno se sirva comunicar en su próxima memoria las medidas tomadas o previstas para suprimir en los criterios de evaluación estos elementos mencionados en la resolución N° 50, con objeto de que la misma corresponda a la práctica descrita según la cual la evaluación del trabajo se realiza únicamente sobre la base de las cualificaciones y de los resultados." 5/

22. Otra forma de control social y político es el ejercido mediante el hostigamiento directo por parte de los organismos de seguridad, o mediante el arresto y la condena judicial por delitos tipificados en la ley. En esta dinámica el sector más vulnerable es el constituido por individuos pertenecientes a grupos que han ido surgiendo, al margen de la legalidad formal, con una orientación de defensa de los derechos humanos o sindicales y, en algunos casos, política. El Relator Especial estima que estos grupos se caracterizan por encima de todo por su afán de utilizar únicamente medios pacíficos en sus reivindicaciones y, en numerosos casos, han dirigido a las autoridades solicitudes de inscripción en el registro de asociaciones del ministerio de justicia, solicitudes que, por regla general, permanecen sin respuesta. Parecen existir en la actualidad, según una lista recientemente recibida por el Relator Especial, un centenar de estas asociaciones y grupos, con distintas características en cuanto al número de miembros, antigüedad u orientación.

23. A propósito del derecho a crear organizaciones sindicales y a afiliarse a ellas el Relator Especial mencionó en su anterior informe a la Comisión de Derechos Humanos 6/ que el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo había examinado una queja relativa, entre otros, a la imposibilidad de crear sindicatos independientes y el monopolio ejercido en

esta materia por el sindicato oficial Central de Trabajadores Cubanos (CTC), habiendo emitido un informe provisional sobre el caso. Entre sus recomendaciones el Comité pidió al Gobierno que enviara observaciones precisas sobre la falta de respuesta del Ministerio de Justicia a la solicitud de registro y de reconocimiento de la personería jurídica de la Unión General de Trabajadores de Cuba (UGTC). En el curso de su reunión del mes de mayo de 1993 el Comité examinó de nuevo la queja a la vista de la respuesta proporcionada por el Gobierno y concluyó lo siguiente:

"280. En cuanto al alegato relativo a la falta de respuesta del Ministerio de Justicia a la solicitud de registro y de reconocimiento de la personería jurídica de la Unión General de Trabajadores de Cuba (UGTC) (cuya acta de constitución con el nombre de varios trabajadores había sido anexada por la organización querellante), el Comité toma nota de las observaciones del Gobierno según las cuales no se ha presentado una solicitud de registro sino que sólo hubo un pedido realizado ante el Ministerio de Justicia de una simple "certificación de reconocimiento" de que en esa dependencia no existía una asociación de trabajadores con la misma denominación y que posteriormente el Sr. Gutiérrez solicitó ante ese mismo Ministerio dejar sin efecto dicha solicitud de registro. A juicio del Comité, dicha "certificación de reconocimiento" parece haber sido solicitada con la expresa finalidad de poder proceder luego a la solicitud del "registro legal" del nuevo sindicato, por lo que se trataría de un procedimiento iniciado con la finalidad manifiesta de obtener el registro de una nueva entidad sindical. El Comité observa además que de la documentación anexada por el Gobierno surge que si bien el Sr. Gutiérrez efectivamente solicitó dejar sin efecto el pedido de registro de la Unión General de Trabajadores de Cuba (UGTC), ello se debió únicamente a que se deseaba modificar la denominación de dicha asociación por la de "Unión Sindical de Trabajadores de Cuba (USTC)".

281. En estas condiciones, el Comité concluye que hace más de un año y medio que se constituyó la Unión General de Trabajadores de Cuba (que según el Gobierno actualmente se denominaría Unión Sindical de Trabajadores de Cuba (USTC)), sin haber logrado todavía obtener su registro. Por otra parte, aunque toma nota de las declaraciones del Gobierno relativas a la falta de representatividad de la UGTC, el Comité debe subrayar que el hecho de que una organización afilie a un número pequeño de trabajadores, no justifica la negativa de su registro. En estas condiciones, el Comité urge una vez más al Gobierno a que se pronuncie de manera inmediata sobre el registro de la Unión General de Trabajadores de Cuba (UGTC) (que según el Gobierno actualmente se denominaría Unión Sindical de Trabajadores de Cuba (USTC)), teniendo en cuenta que en virtud del artículo 2 del Convenio N° 87, los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre toda medida que se adopte a este respecto." 7/

24. Una gran parte de las denuncias recibidas por el Relator Especial se refieren a personas de algún modo vinculadas a agrupaciones de derechos humanos, sindicales o con fines políticos que manifiestan haber sido visitadas por agentes de la Seguridad del Estado en su domicilio o en su lugar de trabajo y amenazadas con perder su empleo, o con ser procesadas, o con ser objeto de los llamados "actos de repudio" por parte de las "brigadas de respuesta rápida" y, en ocasiones, agredidas en la calle por desconocidos o conminadas a abandonar el país. Tales son por ejemplo los casos de Aída Rosa Jiménez y Asalia Ballester Cintas, del Partido Cívico Democrático; de Rolando González Llanes, del Partido pro derechos humanos en Guines, golpeado por miembros de la policía el 24 de agosto de 1993 o de René Contreras Blanch, del Partido Cubano de Derechos Humanos, quien fuera golpeado el 16 de marzo de 1993 en Centro Habana por miembros de la policía que le ocasionaron heridas de consideración en la cabeza. El 15 de enero de 1994 la policía montó un operativo alrededor de las viviendas de René del Pozo y Vladimiro Roca, de la corriente socialista, para impedir la celebración de una reunión. En opinión del Relator Especial el permitir que se "administre justicia" por grupos de personas sin identidad ni responsabilidad legal es algo que no puede aceptarse en ninguna sociedad.

25. En otros casos las personas son citadas a comparecer ante la policía donde son objeto de advertencias o permanecen detenidas durante un breve período y son sometidas a interrogatorio. Las amenazas de tomar represalia contra la familia son también frecuentes, así como los registros domiciliarios. Se denunció, por ejemplo, el caso de Roberto Trobajo Hernández, secretario de la Unión General de Trabajadores de Cuba en provincia Habana y miembro de la Comisión Nacional de Sindicatos Independientes, quien fue detenido el 5 de marzo de 1993 en la localidad de Güira de Melena y conducido a la unidad policial de San Antonio de los Baños, donde permaneció cuatro días antes de ser trasladado al Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) en San José de las Lajas, donde permaneció tres días más; se informó también que fue amenazado con ser procesado por el delito de propaganda enemiga si continuaba oponiéndose al régimen y que como consecuencia de la detención perdió su puesto de trabajo. Rolando Roque Malherbe, miembro de la Corriente Socialista Democrática, amenazado el 23 de septiembre de 1993 para que no celebrara en su domicilio una reunión de carácter social prevista para el día siguiente y que permaneció detenido hasta el día 27; durante la reunión, que no obstante se celebró, tuvo lugar un acto de repudio en el que participaron unas 300 personas, entre las que se encontraban algunos oficiales de la Seguridad del Estado, y varios de los asistentes a la reunión, en su mayoría vinculados a agrupaciones de derechos humanos, fueron amenazados. En relación con los mismos hechos el Sr. Félix Antonio Bonne Carcassés, coordinador de la Corriente Cívica Cubana, fue citado el 27 de septiembre de 1993 a la unidad policial de Río Verde, municipio de Rancho Boyeros y posteriormente conducido al centro de detención del DTI en 100 y Aldabó.

26. Otros casos denunciados son los siguientes: varios miembros del Consejo Nacional por los Derechos Civiles en Cuba y del Partido pro Derechos Humanos (Lázaro Fernández Hidalgo-Gato, Enrique López Valdés, Pedro Pablo Guzmán Cabrera, Sergio Rodríguez Valle, Sergio Llanes Martínez, Alcides Aguilar), fueron detenidos a principios de noviembre de 1992 en San Antonio de los

Baños. Omar Moisés Ruiz Hernández, fue sometido a interrogatorio durante tres días en julio de 1992 en la sede de la Seguridad del Estado en Santa Clara a propósito de denuncias relativas a la problemática del país enviadas al extranjero. Carlos Cordero Páez, miembro del Consejo Nacional por los Derechos Humanos, fue detenido a primera hora del 5 de octubre de 1992 cuando a la entrada del Tribunal Provincial de Ciudad Habana donde iba a celebrarse el juicio contra Sebastián Arcos Bergnes desplegó un cartel con la inscripción "Libertad para Sebastián Arcos"; golpeado y conducido a la unidad de policía situada en Cuba y Chacón, fue puesto en libertad hacia las 11.00 de la noche, una vez que el mencionado juicio ya había finalizado. Ana Daisy Becerra, miembro del Comité de Madres pro Amnistía a Presos Políticos, fue detenida el 13 de diciembre de 1992, conducida a la unidad policial de Picota en Habana Vieja, y amenazada con ser procesada por propaganda enemiga por haber encontrado en su domicilio denuncias sobre violaciones de derechos humanos procedentes de la prisión de Combinado del Este. Paula Valiente, Presidenta de la Asociación Madres por la Dignidad, fue sometida varias veces a interrogatorio durante 1992 y 1993 y amenazada por sus actividades en relación con los presos por delitos de tipo político y por informar al extranjero sobre violaciones de derechos humanos; otros miembros de su organización tales como Hilda Cabrera, Berta Galán y Victoria Cruz y de su familia también han sido amenazados y sometidos a interrogatorios. María Valdés Rosado, coordinadora de la Acción Cívica Democrática y Alicia Suárez, del Movimiento Cubano Demócrata Cristiano, fueron detenidas en La Habana el 7 de mayo de 1993 y puestas en libertad dos días más tarde. Caridad Duarte Gómez, de la Organización Juvenil Martiana, fue sometida a interrogatorio durante varias horas el 4 de agosto de 1993 en la unidad policial del municipio Habana Vieja y el 19 de mayo de 1993 en la estación de Picota y Paula. Vivian Pérez Medina y Gisela Estévez Martínez, de la Fundación Cubana por los Derechos del Hombre, fueron detenidas el 5 de agosto de 1993 en San José de las Lajas, permaneciendo varias horas en la estación de policía durante las cuales fueron amenazadas y obligadas a firmar actas de advertencia. Raúl Valderrama Martínez, secretario general de la Fundación Por los Derechos del Hombre, fue detenido el 17 de noviembre de 1993 en San José de las Lajas y conducido a la unidad de policía municipal, donde fue interrogado a propósito de una entrevista concedida días antes a una periodista extranjera, acusado de difundir noticias falsas y amenazado; fue puesto en libertad dos días más tarde; el Sr. Valderrama ya había sido detenido el 15 de julio de 1993 y puesto en libertad tres meses después. Lázara Herrera Portel, esposa del miembro del Frente Cívico Democrático Eugenio Rodríguez Chaple, fue detenida en La Habana el 23 de noviembre de 1993 y trasladada a la unidad de policía del Capri, donde permaneció durante 72 horas; el 2 de diciembre de 1993 el propio Rodríguez Chaple fue amenazado y maltratado físicamente en la vía pública por individuos que le retuvieron su carnet de identidad, y semanas antes había sufrido un intento de atropellamiento por individuos que viajaban en un vehículo y que lanzaron amenazas contra su persona. Carlos Goicolea, Manuel Sánchez, Argelio Reyes y Leonardo Calvo, miembros de la corriente socialista democrática, fueron citados a partir del 12 de enero de 1994 a unidades de la policía y recibido advertencias en relación con sus actividades políticas.

27. En otro grupo de casos las personas son procesadas y condenadas a penas de prisión más o menos elevadas. Según se informó es frecuente que durante la primera etapa de la instrucción del proceso el detenido sea mantenido en los locales de la policía de seguridad durante períodos de varios meses, en ocasiones en celdas tapiadas de las que es sacado únicamente para ser interrogado repetidamente y a cualquier hora del día o de la noche y con acceso sumamente limitado a las visitas de la familia o de su abogado. El Relator Especial tuvo información recientemente sobre los siguientes casos en particular, algunos de ellos ocurridos ya en 1992:

- a) Pablo Reyes Martínez, miembro de la Unión Cívica Nacional, fue condenado en octubre de 1992 por el Tribunal Provincial de La Habana a ocho años de privación de libertad y confiscación de todos sus bienes por el delito de propaganda enemiga por haberse dado, según la sentencia, "a la tarea de difundir informaciones falsas sobre supuestas violaciones de los derechos humanos en Cuba, así como otros aspectos económicos, con incidencia negativa en las masas del pueblo, que le eran suministrados por diferentes personas desafectas y que el acusado no verificaba, y destinadas manifiestamente a desacreditar la obra revolucionaria, así como el prestigio de sus dirigentes y por ende socavar las bases económicas, políticas y sociales de nuestro sistema";
- b) Luis Enrique Grave de Peralta Morel, antiguo profesor de física expulsado de la Universidad de Oriente por haber renunciado a su condición de miembro del partido comunista, y los investigadores de la Academia de Ciencias de Cuba Arquímedes Ruiz Columbié, Robier Rodríguez Leiva y Carlos César Orue Caballero fueron detenidos el 13 de febrero de 1992 en Santiago de Cuba en relación con la creación de un movimiento político llamado "Nueva Generación" crítico de la política gubernamental. Posteriormente fueron condenados por el delito de rebelión a 13, 8, 10 y 8 años respectivamente de privación de libertad;
- c) Bárbara Celia González Toledo, licenciada en economía y contadora pública, fue condenada por desacato el 15 de julio de 1992 por el Tribunal Provincial de Ciego de Avila a un año y seis meses de cárcel y pérdida del puesto de trabajo por haber expresado en privado opiniones críticas contra los dirigentes del país;
- d) Juan José Moreno Reyes, Luis Reyes Reynosa, Benigno Raúl Benoit Pupo, Eduardo Guzmán Fornaris, Enrique Chamberlays Soler, Lorenzo Cutiño Bárzaga, Adolfo Durán Figueredo, Wilfredo Galano Matos, Rafael Rivera Matos, Maritza Santos Rosell, Ramón Mariano Peña Escalona y Ramón Fernández Francisco fueron condenados a penas de prisión entre 13 y 5 años de privación de libertad por los delitos de rebelión y otros actos contra la seguridad del Estado en marzo de 1993 por el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba. Los hechos imputados tenían que ver con la celebración de reuniones y la confección y distribución de

volantes en varios municipios de la provincia de Holguín a través de los cuales se criticaba al Gobierno. Otras siete personas recibieron condenas entre uno y dos años en relación con los mismos hechos;

- e) Juan Francisco Fernández González, médico, fue detenido el 18 de marzo de 1992 en La Habana y procesado por el delito de propaganda enemiga. Durante el juicio, celebrado el 15 de diciembre de 1992, se modificó la calificación del delito imputado por el de rebelión con lo cual fue condenado a 10 años de privación de libertad. En un año fue cambiado no menos de seis veces de lugar de detención. Por la misma causa el Tribunal Provincial de La Habana condenó también a Eduardo Prida, licenciado en psicología, y Mario Godínez, electricista, a 15 y 12 años de reclusión respectivamente;
- f) Amador Blanco Hernández, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos José Martí fue detenido el 10 de diciembre de 1992 en su domicilio de Caibarien, Villa Clara, y conducido al Departamento de Seguridad del Estado en Santa Clara. Acusado de propaganda enemiga junto con Joel Mesa Morales, vicepresidente de la misma Comisión detenido el 26 de enero de 1993, fueron condenados en septiembre de 1993 a ocho y siete años de prisión, respectivamente, por el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara. En sus conclusiones provisionales el fiscal mencionó entre los hechos imputados que los acusados "venían dedicándose a realizar una campaña propagandística a fin de desacreditar a la revolución cubana mediante la recopilación de innumerables denuncias de un falso contenido, consistentes en supuestos maltratos y agresiones físicas, persecuciones, injurias y amenazas de las que... habían sido víctimas distintas personas y reclusos por miembros del Ministerio del Interior en general y combatientes y reeducadores de los centros penitenciarios en específico, las que enviaba por diferentes vías a diferentes emisoras subversivas". En 1982 el Sr. Blanco Hernández había sido expulsado de su puesto de profesor en la Universidad Central de Las Villas por haberse mostrado crítico de la política gubernamental;
- g) Angel Prieto Méndez, piloto retirado de Cubana de Aviación y fundador del grupo Asociación Martiana Opositora al Régimen, fue detenido el 26 de diciembre de 1991 y acusado de propaganda enemiga y desacato. El 6 de enero de 1993 fue juzgado y condenado a diez años de prisión. En la actualidad cumple condena en la prisión de Guanajay;
- h) Alfredo García Quesada, electricista y estudiante de la Universidad de Camagüey, fue detenido el 23 de abril de 1993 en la localidad de Guayabal, Las Tunas, por haber repartido volantes con el texto de "Abajo Fidel" y pintado estas palabras en el cuerpo de un caballo blanco. En la actualidad cumple condena de cinco años en la prisión del Típico de Las Tunas;

- i) Adriano González Marichal, del Movimiento Pacifista Solidaridad y Paz, fue detenido el 6 de enero de 1992. Durante el juicio celebrado en septiembre de 1993 se le acusó principalmente de mantener contactos con organizaciones de cubanos en el exterior y fue condenado a 12 años de prisión por propaganda enemiga;
- j) Luis Felipe Lorens Nadal, presidente de la Organización Juvenil Martiana, fue detenido el 22 de septiembre de 1993 en La Habana. Unos días más tarde fue sometido a juicio y condenado a cuatro años de privación de libertad por peligrosidad, habiendo sido acusado de provocar a los trabajadores del Hotel Comocoiba y de no trabajar. En la actualidad cumple condena en la prisión Combinado del Este.

28. El Relator Especial fue también informado de los siguientes casos de personas formalmente acusadas de propaganda enemiga o delitos similares y que, en el momento de recibirse la información, se encontraban detenidas a la espera de juicio: Luis Gustavo Domínguez Gutiérrez, de la agrupación Paz, Progreso y Libertad, acusado de propaganda enemiga por enviar una carta al Gobierno donde renunciaba a las medallas obtenidas por su participación en la campaña de Angola; Pedro Armentero Lazo, encarcelado en el penal Combinado del Este; Orfilio García Quesada, detenido en la localidad de El Guayabal, Victoria de Las Tunas, en mayo de 1993 por haber participado en un proceso de recogida de firmas pidiendo cambios políticos; Roberto Alvarez San Martín, conocido escritor y periodista, invalidado de la práctica de su profesión en febrero de 1992; Domiciano Torres, ex profesor de arquitectura que fuera expulsado de su cátedra en el Instituto Tecnológico Armando Mestre de Guanabacoa en 1992 y vicepresidente del Partido Cívico Democrático, detenido el 13 de agosto de 1993 y conducido a los locales de la Seguridad del Estado en Villa Marista, donde permaneció por espacio de 42 días; en el momento de la detención habría sido brutalmente golpeado; posteriormente fue trasladado al hospital psiquiátrico de La Habana; las últimas informaciones recibidas indicaban que se encontraba a la espera de juicio en la prisión El Pitirre del municipio de San Miguel del Padrón, Ciudad Habana.

29. El Relator Especial también fue informado de que en el curso de 1993 una gran cantidad de personas habría sido condenada a penas de prisión entre uno y cuatro años en aplicación de las disposiciones sobre peligrosidad, en particular jóvenes acusados de estar involucrados en incidentes de orden público. Se informó también que los juicios que se celebraban en estos casos no contaban con las garantías mínimas del derecho de defensa y que los acusados resultaban condenados de manera casi sistemática en juicios que se celebraban muy pocos días después de haberse producido la detención. Fuentes periodísticas indicaron que entre finales de agosto y principios de noviembre de 1993 cerca de 2.500 personas habían sido condenadas por estos motivos 8/.

30. A propósito de los procedimientos seguidos en los casos con connotaciones políticas el Relator Especial recibió información sobre el papel de los abogados. Según se dijo, los abogados no tienen como misión primordial la defensa de los intereses de su cliente, ya que éstos están subordinados a los intereses del sistema. Personas que habían sido condenadas por delitos de tipo político manifestaron al Relator Especial que conocieron a su abogado

defensor sólo en el momento del juicio oral, que la defensa consiste en presentar algunas atenuantes de tipo convencional más que en probar la inocencia del acusado, el cual siempre tiene de antemano la seguridad de que va a ser condenado; que en una gran cantidad de casos no se hace entrega de la copia de la sentencia al interesado o su familia, y a veces tampoco de la petición fiscal, con lo cual al llegar al juicio el acusado sólo dispone de la versión oral dada por el instructor, es decir la policía en el sistema procesal cubano, sobre la calificación legal de los delitos imputados. En el mismo orden de cosas los artículos 160 y 161 del Código de Procedimiento Penal, que hacen referencia a la forma en que se debe proceder a tomar declaración a los acusados durante la fase preparatoria del proceso en la unidad policial correspondiente, no conceden a los acusados el derecho a prestar declaración en presencia de un abogado defensor, de su elección o de oficio.

31. En repetidas ocasiones el Relator Especial recibió denuncias sobre la manera en que son conducidos los juicios por delitos contra la seguridad del Estado: discriminación entre el tratamiento dado a los testigos de la defensa y de la acusación, actitud excesivamente agresiva por parte del fiscal y falta de imparcialidad manifiesta en la manera de conducir los debates por parte del juez parecen ser prácticas habituales.

32. Además de las medidas anteriormente expuestas es también frecuente la pérdida del puesto de trabajo, a menudo acompañada de amenazas y campañas de descrédito contra las víctimas. Esta medida resulta particularmente dramática para las personas afectadas debido a que, al ser el Estado el único empleador, se les impide encontrar otro trabajo en consonancia con sus cualificaciones y además todo el núcleo familiar sufre las consecuencias. Los siguientes son algunos de los casos que fueron comunicados al Relator Especial:

- a) Rolando Díaz Acosta, expulsado de su puesto en la Biblioteca Nacional José Martí del municipio 10 de octubre en octubre de 1992 por haber firmado, junto con un grupo de intelectuales, una carta dirigida a los presidentes participantes en la segunda Cumbre Iberoamericana llamando la atención de éstos sobre la necesidad de efectuar cambios en el país; por el mismo motivo fue igualmente expulsado de la casa donde vivía;
- b) Guillermo Fernández Donates, expulsado de su puesto de ingeniero civil en la empresa de proyectos de construcción N° 2 en La Habana, en octubre de 1992, por haber manifestado ser miembro de la Corriente Cívica y del Comité Cubano pro Derechos Humanos; además, en febrero de 1993 fue expulsado de la Universidad de La Habana donde estudiaba derecho y del centro deportivo que frecuentaba. Su esposa, Euridice Sotolongo Losada, se vio obligada a presentar su baja en el mismo centro laboral;
- c) Heriberto Alejandro Barrio Lorences, expulsado de su puesto de ingeniero del Instituto de Proyectos Azucareros en La Habana en junio de 1992 por haber transmitido al extranjero información sobre la

detención bajo acusación de propaganda enemiga de su compañero de trabajo Mariano Gort;

- d) Leonardo José Rodríguez Pérez, expulsado de su puesto de investigador en el Centro de Investigaciones Metalúrgicas de La Habana en enero de 1993 por haber suscrito la mencionada carta a la Cumbre Iberoamericana.

33. El Relator Especial recibió también información sobre los siguientes casos de expulsiones de profesores universitarios en aplicación del Decreto-ley N° 34/1980, el cual faculta a los jefes de las Direcciones Municipales de los Organos Locales del Poder Popular a despedir a los miembros del personal de establecimientos superiores alegando su actividad contraria a la moral socialista y a los principios ideológicos de la sociedad:

- a) Reinaldo Cosano Alén, fue expulsado de su puesto de profesor en la facultad "Jesús Suárez Gayol" de Guanabo, La Habana, en septiembre de 1992 por su colaboración con el Comité Cubano pro Derechos Humanos; en el documento oficial que hace firme la expulsión las actividades del Sr. Cosano son calificadas como inapropiadas para la labor de un educador, ya que por su carácter tienen grave repercusión en la formación de los niños y jóvenes cubanos;
- b) Ramón Rodríguez Ríos perdió su puesto de profesor en un centro de San Antonio de los Baños, quedando definitivamente inhabilitado para el ejercicio de la docencia en 1992 al haberse podido comprobar, según las resoluciones de expulsión, que "perteneció de forma directa a un grupúsculo de los derechos humanos", acto éste considerado "contrario a la moral socialista y a los principios de nuestra sociedad";
- c) Félix Díaz Cáceres, profesor de educación física en Pinar del Río, fue expulsado de su puesto en mayo de 1992 por haber manifestado su desacuerdo con la expulsión de un grupo de profesores universitarios de sus cátedras autores de una declaración de principios en que se pedían cambios políticos 9/; el 3 de agosto del mismo año fue citado a las oficinas de la Seguridad del Estado donde fue interrogado a propósito de la "Carta abierta de profesionales cubanos a la Cumbre Iberoamericana"; en septiembre fue detenido y permaneció durante 18 días en el Departamento de Seguridad del Estado en Pinar del Río acusado de propaganda enemiga.

34. En opinión del Relator Especial estas expulsiones, que son recientes, contrastan con lo indicado por la Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Oficina Internacional del Trabajo en su examen de la aplicación del Convenio N° 111: Discriminación: Empleo y ocupación incluido en su informe de 1992 en el sentido siguiente:

"La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno según la cual las disposiciones del Decreto-ley N° 34/1980... no tienen aplicación práctica en la actualidad. La Comisión espera que, como el Gobierno lo

había indicado, estas disposiciones serán armonizadas con el Convenio cuando se proceda a una revisión de la susodicha legislación. Además, la Comisión solicita de nuevo al Gobierno tenga a bien suministrar el texto de la resolución conjunta N° 2, de 20 de diciembre de 1989, de los Ministros de Educación y de Educación Superior, que trata de la rehabilitación de los trabajadores de la enseñanza a quienes se ha aplicado el Decreto-ley N° 34/1980." 10/

En su informe de 1993 la Comisión solicitó de nuevo al Gobierno que proporcionara copia de la resolución N° 2 de 20 de diciembre de 1989 11/.

C. El derecho a salir y entrar al país

35. Según la información recibida, a pesar de que en los últimos años las autoridades cubanas han mitigado las restricciones en materia de viajes al extranjero de sus ciudadanos, por ejemplo rebajando a 20 años la edad mínima para viajar, muchas limitaciones aún subsisten. En general, el derecho a salir del propio país y a regresar al mismo, que figura en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no está reconocido. Todas aquellas personas que deseen abandonar el país, ya sea de manera temporal o permanentemente, deben obtener un permiso de salida del Ministerio del Interior, permiso que es otorgado de manera discrecional.

36. Con respecto a los casos de reunificación familiar la esposa e hijos de ciudadanos ordinarios que salen del país de manera temporal pero que posteriormente se quedan en el extranjero, obtienen normalmente autorización para reunirse con sus familiares. Sin embargo, en los casos de ciudadanos que ocupaban puestos considerados sensibles o que se han mostrado abiertamente críticos del sistema se les niega con frecuencia a las familias dicha autorización. Se denunciaron, en este sentido, los casos de Nydia Cartaya Medina y sus cuatro hijas, a quienes se les ha negado la autorización de salida desde que el esposo de aquélla, un antiguo militar, obtuvo asilo en los Estados Unidos en 1985. También el caso de Dalgis Nelson Ginarte y su hija Indira Lázara Martínez Nelson, de Santiago de Cuba, titulares de un visado para reunirse con su esposo y padre en Estados Unidos, así como el de Marelis Mena García y su hija Marel Franquiz Mena, esposa e hija de un físico nuclear, en la misma situación.

37. Aún en los casos en que las personas obtienen un permiso para emigrar es frecuente que éstas sean objeto de represalias como consecuencia de su solicitud, tales como el despido del puesto de trabajo, o la degradación en el mismo, la expulsión de los centros de estudio o la pérdida de la libreta de racionamiento. Además las propiedades de las personas en cuestión, tales como vivienda, mobiliario y automóvil pasan a manos del Estado.

38. Al lado de estas situaciones se dan otras en que activistas de derechos humanos, algunos de ellos en prisión, se ven hostigados por las autoridades para conminarlos a que abandonen el país. Se denunciaron así casos como los de Sebastián Arcos Bergnes o Yndamiro Restano, citados más adelante, o el de Rodolfo González González, del Comité Cubano pro Derechos Humanos o el de Félix Fleyta Posada, de la Asociación pro Arte Libre, quien cumple condena en

la prisión de Agüica. En el caso de Francisco Chaviano González, del Consejo Nacional por los Derechos Civiles en Cuba, la autorización de salida del país de sus hijos, titulares de visados de entrada en los Estados Unidos, ha sido condicionada a que el Sr. Chaviano mismo abandone el país.

39. Continúa, por otro lado, el flujo de personas que, por cualquier medio, tratan de abandonar el país de manera irregular. Según algunas fuentes aproximadamente 25 personas harían el intento diariamente, calculándose a grandes rasgos que sólo una de cada cuatro lograría su propósito, otras dos se verían obligadas a regresar ante los peligros materiales o serían detenidas, y la cuarta perecería en el intento. Se estima también que en 1992 llegaron a las costas estadounidenses unas 2.500 personas en esta situación y en torno a 3.000 durante 1993. Las fuentes consideran que aunque las razones políticas también pesan la principal causa de esta emigración es la situación económica así como de falta de oportunidades y alternativas que vive el país, de ahí que haya aumentado tanto durante los últimos años. Dado el enorme riesgo para la vida que conlleva, el Relator Especial considera negativo el que se aliente a la población cubana desde el exterior a intentar este tipo de salida.

40. Se informó igualmente que patrullas guardacostas cubanas han disparado en repetidas ocasiones contra personas que trataban de llegar por mar, e incluso a veces también por tierra, a la base naval norteamericana de Guantánamo con la intención de pedir asilo, como en el caso del joven Ismar Torres Pérez, que falleció, a consecuencia de los disparos recibidos, el 8 de agosto de 1993. Según los denunciante esta actitud es tanto más criticable cuanto que el empleo de la fuerza resulta excesivo e innecesario si el objetivo es únicamente detener a las personas. Incidentes de uso excesivo de la fuerza se han denunciado también en otros puntos de la costa en relación con personas que trataban de abandonar el país por sus propios medios o en embarcaciones procedentes del extranjero que se acercaron a las costas cubanas para recoger ciudadanos de este país. Así, el 1º de julio de 1993 resultaron muertos por disparos de guardias guardafronteras Alfredo Evelio Caballín Marín, Loamis González Manzini, de 16 años, y Mario Horta cuando, junto con otras personas, trataban de alcanzar una embarcación estadounidense en la costa de la localidad de Cojímar. El 15 de octubre de 1993 resultó muerto Luis Quevedo Remolina, de 23 años, después de haber sido sorprendido por guardias guardafronteras cuando, junto con otros siete jóvenes, intentaba abandonar el país en una balsa por la localidad de Regla; según se informó la muerte fue ocasionada por la gran cantidad de golpes que le fueron propinados inmediatamente después del arresto; además, los jóvenes fueron tiroteados en el momento de ser sorprendidos.

41. Las personas que son detenidas mientras trataban de abandonar el país continúan siendo procesadas en aplicación del artículo 216 del Código Penal. Además el hecho de haber acumulado durante un tiempo material destinado a la salida del país y su traslado al punto planificado se considera delito consumado. Varios de estos casos fueron comunicados al Relator Especial, como el de Alejandro Joaquín Fuertes García, condenado el 10 de mayo de 1992 a cinco años de privación de libertad por salida ilegal por el tribunal provincial de Santa Clara, después de un juicio en el que su abogado defensor no compareció. En el momento de ser detenido por agentes de la Seguridad del

Estado de Santa Clara fue severamente golpeado lo que le habría ocasionado, entre otros, un desprendimiento de riñón y reducción de la visión en un ojo.

42. Por último el Relator Especial considera positiva la medida adoptada por las autoridades cubanas en el sentido de aumentar el número de ciudadanos cubanos residentes en el extranjero que pueden visitar el país. Si hasta ahora sólo se concedían 90 visados por semana, además de los visados humanitarios otorgados en caso de enfermedad grave o muerte de un familiar, con las nuevas medidas anunciadas a finales de julio de 1993, las autoridades cubanas pueden conceder 100 visados turísticos diarios a aquellos cubanos que abandonaron el país hace más de cinco años.

III. LA SITUACION EN LAS PRISIONES

43. Según se informó la situación alimentaria e higiénica así como la deficiencia en la atención médica continúa siendo alarmante y ha ocasionado numerosos problemas de enfermedades entre la población penitenciaria. Anemia, diarrea, enfermedades de la piel así como parasitismo a consecuencia de la contaminación del agua parecen ser enfermedades comunes en la mayoría de las prisiones, mientras que en algunas como la de Manacas y Combinado del Este se han registrado casos de tuberculosis. Esta situación ha ocasionado la muerte de algunos reclusos como en los casos de Alcides Pérez Rodríguez, detenido pendiente de juicio en la prisión provincial de Ariza, quien falleció el 5 de marzo de 1993 en el hospital provincial de Cienfuegos a consecuencia de una infección generalizada; Juan Enrique Olano Pérez, quien llevaba dos años recluido en la prisión de Quivicán y que falleció en el hospital Hermanos Ameijeiras a donde fue conducido cuando su estado era ya crítico; o el de Junior Flores Díaz, recluso de 17 años en la prisión habanera de Valle Grande, quien falleció el 12 de diciembre de 1993 después de habersele negado asistencia médica y de haber sido golpeado y mantenido en una celda de castigo.

44. Reclusos que han manifestado alguna forma de protesta con respecto al trato recibido o que rechazan la reeducación, entendiéndolo por tal, según la información recibida, formación política e ideológica, han sido objeto de represalias tales como palizas, internamiento en celdas de castigo (de dimensiones extremadamente exiguas, con la puerta tapiada y donde el detenido puede permanecer durante meses sin ver la luz del sol), traslado de prisión, normalmente lejos del lugar de residencia de su familia, suspensión de visitas familiares, o denegación de tratamiento médico. Se producen así casos como el de Luis Alberto Pita Santos, presidente de la Asociación Defensora de los Derechos Políticos, recluido en la prisión Kilo 8 de Camagüey, quien ha sido golpeado en repetidas ocasiones para forzarle a vestir el uniforme y encadenado durante largos periodos a los barrotes de su celda; antes de ser trasladado a esta prisión, a principios de 1993, se encontraba en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba donde al parecer pasó varios meses en celdas de castigo y donde sufrió una paliza en diciembre de 1992 de la que resultó con un brazo fracturado; en el mismo incidente fue también golpeado su compañero de celda Jesús Chambes Ramírez, resultando con un pómulo roto y hematomas en varias partes del cuerpo. También se informó que algunos presos

habían sufrido traslados de prisión o habían sido internados en celdas de castigo por haberseles encontrado escritos con denuncias sobre la situación en la prisión, como en el caso de Arturo Suárez Ramos, miembro del Comité Cubano pro Derechos Humanos, trasladado de la prisión Combinado del Este a Boniato y encerrado en una celda de castigo por hacer denuncias sobre la situación de los presos. Carlos Alberto Aguilera Guevara, Roberto Mures, Luis Grave de Peralta, Jesús Chambert, Ibrán Herrera Ramírez, Enrique González, Rodolfo Gutiérrez y Robier Rodríguez, reclusos en el penal de Boniato, quienes fueron golpeados y trasladados a la prisión de mayor rigor Kilo 8 de Camagüey el 12 de febrero de 1993 por encontrarse en huelga de hambre en protesta por el maltrato sufrido; a principios de octubre de 1993 Carlos A. Aguilera, Jesús Chambert, Rodolfo Gutiérrez y Roberto Mures fueron severamente golpeados por protestar sobre las condiciones de detención e introducidos en celdas de aislamiento. Se denunciaron también los casos de Tomás Córdova e Hibraín Odelín Hardin, reclusos en la prisión Micro 4 de Alamar, Ciudad Habana, quienes fueron brutalmente golpeados por varios guardias el 30 de octubre de 1993, a consecuencia de lo cual el Sr. Odelín sufrió una perforación de tímpano. También el caso de Junior Flores Díaz, recluso de 17 años en la prisión habanera de Valle Grande, quien falleció el 12 de diciembre de 1993.

45. El Relator Especial ha recibido material denunciando el uso de la psiquiatría con fines ajenos a los puramente médicos, sin embargo no cuenta con elementos suficientemente sólidos para afirmar que este uso se produzca. El Relator Especial sí observó, por el contrario, en sus conversaciones con antiguos presos que parece existir un miedo entre la población penitenciaria a ser sometido a este tipo de tratamiento.

46. El número de personas cumpliendo condena por delitos de tipo político es difícil de evaluar. Algunas fuentes estiman el número entre 2.000 y 5.000 civiles, incluidos los condenados por salida ilegal. La agrupación Comité Cubano pro Derechos Humanos proporcionó al Relator Especial una lista de 602 presos que se encontraban cumpliendo condena en 1992 por delitos de tipo político. De ellos 342 fueron condenados por el delito de propaganda enemiga, 83 por sabotaje, 31 por piratería, 52 por desacato, 15 por terrorismo, 14 por espionaje, 14 por actos contra la seguridad del Estado, 16 por rebelión, 15 por asociación ilícita y el resto por delitos varios. Un pequeño número de presos fueron puestos en libertad durante 1993 con la condición de que abandonaran el país. Otros, como Sebastián Arcos Bergnes, que cumple condena de cuatro años y ocho meses en la prisión de Ariza, Cienfuegos e Yndamiro Restano, presidente del Movimiento Armonía, condenado a diez años, han rechazado esta propuesta.

IV. CONSIDERACIONES EN TORNO AL DISFRUTE DE LOS DERECHOS
ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES

47. El informe del grupo de embajadores que visitó Cuba de acuerdo con la decisión 1988/106 de la Comisión de Derechos Humanos recoge los comentarios hechos por representantes del Gobierno de Cuba sobre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales en el país. El Relator Especial considera apropiado recordar algunos de aquellos comentarios:

"El Ministro de Trabajo indicó al grupo que el Estado garantiza el derecho al trabajo de todos los cubanos; que en Cuba no existe desempleo y que el sistema de seguridad social protege la maternidad, la infancia y la vejez y cuida de quienes se enferman o accidentan temporal o definitivamente.

...

En su reunión con el grupo, el Presidente del Consejo de Estado manifestó que los alcances de la Revolución en el terreno social habían sido sobresalientes, indicando que como resultado de los esfuerzos del régimen en el campo de la salud preventiva, del tratamiento maternoinfantil y de la alimentación, durante las últimas tres décadas su Gobierno había salvado la vida a aproximadamente 300.000 niños que no hubieran sobrevivido de no haberse introducido cambios sustanciales en la política social cubana. Comparó la experiencia de Cuba en este terreno con lo que ocurre en otros países del Tercer Mundo, donde como resultado del injusto orden económico internacional, diariamente mueren de hambre muchos niños.

...

El Ministro de Salud indicó que en Cuba la esperanza de vida promedio asciende hoy a 74,6 años (frente a 58 años en 1965 y 52 años en 1959), lo que ubica a Cuba en un nivel comparativo al de muchos países desarrollados. Dijo a su vez, que otros logros en el terreno de la salud pública son el tratamiento de las enfermedades infecciosas, los avances en el área nutricional, la erradicación de la malaria, la difteria, la tuberculosis, la polio, la meningitis, el tétano para niños y otras epidemias infantiles habituales, así como la reducción drástica de la mortalidad infantil... Manifestó además que este esfuerzo en el campo de la salud hubiera fracasado de haberse descuidado la formación de futuros médicos, enfermeras y personal técnico especializado. Otro de los indicadores del esfuerzo hecho por el régimen en el campo de la salud en Cuba es el estímulo que se brinda actualmente a la investigación científica aplicada, especialmente en el campo de la genética y las enfermedades tropicales, así como el impulso que está recibiendo el desarrollo de una industria productora de equipos médicos.

En su reunión con el grupo el Ministro de Educación [manifestó]... que la etapa escolar va de los 6 a los 16 años. Durante ella, el porcentaje de niños y niñas matriculados es de 93%, elevándose ese porcentaje a 98% para la categoría de 6 a 12 años. Todo el sistema escolar es gratuito y obligatorio.

En relación con la enseñanza universitaria el Ministro de Educación Superior informó al grupo que en 1959 existían en Cuba 15.000 estudiantes universitarios, los que se elevaron a 35.000 en 1971 y a 85.000 en 1976, ascendiendo en la actualidad a 310.000, lo que representa el 3% de la población total." 12/

48. Algunas estadísticas que figuran en el Informe sobre Desarrollo Humano preparado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para 1993 confirman algunos de los datos indicados por las autoridades mencionadas:

- a) La esperanza de vida al nacer para 1990 era de 75,4 años contra 63,8 en 1960;
- b) La mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) era de 14 niños en 1991 contra 65 en 1960;
- c) El porcentaje de la población con acceso a servicios de salud (años 1987-1990) era del 100%, tanto en áreas urbanas como rurales;
- d) El número de habitantes por médico (años 1984-1989) era de 530;
- e) La tasa de alfabetismo de adultos para 1990 era de 94% contra 87% en 1970;
- f) La tasa combinada de matrícula en escuelas primarias y secundarias (años 1987-1990) era del 95%, contra el 76% en 1970.

49. En un informe preparado por el Partido Demócrata Cristiano de Cuba (PDC) en el exterior que le fue entregado al Relator Especial se hace un balance de los logros alcanzados en las últimas décadas en el ámbito social y que una mayoría de la población siente como algo positivo.

50. En el ámbito educativo el informe menciona que el Gobierno cubano ha realizado en 33 años la tarea de crear una infraestructura educativa. Centros infantiles, escuelas, institutos de segunda enseñanza, preuniversitarios, institutos técnicos y universidades existen en todo el país. Se han formado maestros y profesores en gran número y se han establecido una serie de leyes que amparan la educación como una de las tareas fundamentales del Gobierno. Además la educación es prácticamente gratuita.

51. En el ámbito de la salud el informe del PDC señala que el Gobierno cubano ha creado una infraestructura en todo el país, no sólo en cuanto a hospitales sino también en la preparación de médicos, enfermeras y todo el personal sanitario. Sin embargo, muchos de los logros que se habían alcanzado, entre

ellos los bajos índices de mortalidad infantil, alta esperanza de vida, erradicación de enfermedades, están siendo duramente afectados por la crisis económica que atraviesa el país. Uno de los renglones más afectado es el de los materiales quirúrgicos. Solamente se está operando a los pacientes de emergencia y faltan medicinas y materiales de laboratorio. La falta de medicinas y la deficiente alimentación está produciendo avitaminosis y graves deficiencias nutricionales.

52. En el campo de la seguridad social el mencionado informe recuerda que en enero de 1980 se promulgó la Ley N° 24 que puso en vigor el Sistema de Seguridad Social, compuesto por dos regímenes: el de seguridad social y el de asistencia social; el primero ofrece protección al trabajador en caso de enfermedad y accidente de origen común o profesional, maternidad, invalidez y vejez. En caso de muerte del trabajador, protege a su familia. El régimen de asistencia social ampara especialmente a los ancianos, personas no aptas para trabajar y, en general, a todos aquellos cuyas necesidades esenciales no están aseguradas, o que por sus condiciones de vida o salud requieren protección. Entre las prestaciones establecidas se encuentran:

- a) Pensión por edad a la que tienen derecho los hombres a los 60 años y las mujeres a los 55 años;
- b) Pensión por invalidez;
- c) Pensión por causa de muerte. Tienen derecho la viuda, el viudo mayor de 60 años o incapacitado que dependiera de la trabajadora fallecida; los hijos, incluyendo los adoptivos, menores de 17 años; la madre y el padre, incluyendo los adoptivos;
- d) En cuanto a las prestaciones a la mujer la ley protege a la madre trabajadora mediante el disfrute de una licencia retribuida por maternidad de 18 semanas.

53. El mismo informe indica que según han manifestado las autoridades, a pesar de la crisis económica actual el sistema de seguridad social se ha mantenido inalterable.

54. El Relator Especial estima que las consideraciones contenidas tanto en el informe del Grupo de Embajadores que visitó Cuba en 1988 como en el informe del partido político mencionado traducen, de una manera global, el sentir de una gran parte de la población, la cual reconoce que durante los últimos 30 años el Gobierno ha realizado esfuerzos y conseguido avances importantes en la promoción y protección de los derechos económicos sociales y culturales. El mantenimiento de estos avances lamentablemente podría verse condicionado por la actual crisis económica que vive el país en estos momentos. La voluntad política de mantener la protección social de la población parece ser inalterable por parte del Gobierno; no obstante, la falta de recursos adecuados representa un verdadero riesgo de que el sistema no pueda seguir funcionando de la manera deseada.

55. Las reformas introducidas en la economía cubana principalmente durante el último año comprenden la promoción de las inversiones directas procedentes del extranjero, el incremento de la cooperativización de la agricultura, permitir el ejercicio de pequeños negocios privados de carácter familiar y la posibilidad de recibir y hacer uso de moneda extranjera. Estas medidas están destinadas a fortalecer la balanza de pagos así como a incrementar el abastecimiento de bienes y servicios para la población.

56. Medidas adicionales con los mismos fines son imprescindibles, y también parecen estar en camino, con miras a desarrollar una economía que pueda satisfacer las necesidades básicas de la población.

57. En las circunstancias actuales, la economía paralela que ha surgido principalmente a través de la libre circulación de divisas y el sector turístico está causando importantes cambios en la distribución de ingresos. Dada la trayectoria cubana de las últimas décadas de una relativa igualdad en el ámbito económico y social, este efecto sin duda involuntario del programa económico, junto con un desempleo creciente, podría ser el origen de tensiones sociales.

58. Las reformas económicas están frenadas por factores ideológicos y políticos, en particular por un marcado recelo hacia todo lo que signifique limitar el control gubernamental. Asimismo el embargo económico, comercial y financiero mantenido por los Estados Unidos frena una mayor apertura de la economía. El bloqueo contra Cuba, además de dificultar y aumentar de manera dramática el coste de las reformas, crea barreras políticas para acciones más profundas y resultados más inmediatos en un momento en que una reactivación urgente de la economía es necesaria desde un punto de vista humanitario y, en última instancia, desde una perspectiva de derechos humanos. Los aspectos relativos a los efectos del embargo desde el ángulo del derecho internacional fueron tratados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 48/16 titulada "Necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba".

V. INFORMACION RECIBIDA DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES CON SEDE EN CUBA DE ACUERDO CON LA LEGISLACION VIGENTE

59. El Relator Especial recibió cartas de una serie de organizaciones e instituciones dentro de Cuba comentando diversos aspectos vinculados con la situación de los derechos humanos en el país así como el contenido del informe presentado por el Relator Especial ante el 49º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos. Se resume a continuación el contenido de dichas cartas.

60. La Unión Nacional de Juristas de Cuba indicó con respecto al mencionado informe que la Declaración Universal de Derechos Humanos no fue tomada en consideración en su totalidad para analizar el incumplimiento de sus preceptos en Cuba sino que de los 30 artículos con que cuenta sólo se tomaron en consideración los relativos al derecho de toda persona a circular libremente

y a entrar y salir de su país; el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; el derecho a la libertad de opinión y de expresión; el derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica, así como la situación en las prisiones. Sin embargo, el análisis de los derechos humanos en cualquier país debe incluirlos todos, ya que de lo contrario se llega a conclusiones parcializadas que no reflejan la realidad adecuadamente. Además, el enfoque adoptado para el análisis del cumplimiento de los derechos mencionados se efectuó obviando el clima de hostilidad que los Estados Unidos desde hace 34 años viene imponiendo a Cuba, constituyendo el bloqueo económico la causa fundamental de las condiciones de vida adversas por las que está atravesando el pueblo cubano, y tomando como válidas fuentes de información de poco crédito o basadas en rumores y especulaciones de los medios de comunicación hostiles hacia Cuba radicados fundamentalmente en Miami, o de otros que supuestamente radican en Cuba pero que no están legitimados ni disponen de crédito, membresía y prestigio.

61. El Relator Especial también recibió de Cuba una carta del centro llamado Félix Varela comentando, con respecto al informe del Relator Especial que éste no hacía mención del contexto histórico en el que el sistema político cubano emergió y se desarrolló y, en particular, de la continua agresión de los Estados Unidos durante 35 años. La intransigencia cubana se explicaría así por el rechazo de la población ante la idea de la posible pérdida de su independencia y la restauración del status quo anterior. Se pregunta esta organización qué legitimidad puede tener una política que en nombre del "restablecimiento" de los derechos civiles y políticos de la población cubana decide privarle de sus derechos económicos, sociales y culturales, y si no sería más apropiado liberar al pueblo de toda presión ajena y propiciarle, en pleno respeto a su autodeterminación, la ayuda material y espiritual para que él mismo decida su opción. El informe del Relator Especial, lejos de contribuir a los derechos humanos en Cuba propicia su violación por dos vías: masivamente porque no denuncia la política genocida de los Estados Unidos contra la población cubana y, en casos aislados, porque fomenta el rechazo y la intolerancia, dificultando el reposado clima que requiere todo ejercicio de análisis autocrítico.

62. El Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos manifestó que, en lo que se refiere a los derechos civiles y políticos, la revolución cubana ha creado una amplia y profunda democracia basada en la participación directa y sistemática de todo el pueblo en la toma y aplicación de decisiones y en la elección de dirigentes a todos los niveles, desde los casi 14.000 delegados de circunscripciones propuestos y elegidos directamente en la base, hasta los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular y de los órganos del Estado. En Cuba no existe represión policial, ni bandas paramilitares, ni personas en prisión sin haber sido juzgadas y sancionadas por tribunales competentes en base a leyes cuya promulgación precede a la realización de los delitos, sin que entre éstos figure ninguno que tenga que ver con las ideas políticas o las creencias religiosas. En tanto en el mundo proliferan las torturas, los asesinatos, los desaparecidos, etc., en Cuba no puede citarse un solo caso en que se produjera o produzca algún acto de esa naturaleza a lo largo de más de tres décadas de revolución. Tampoco hay en Cuba un solo caso de discriminación por algún motivo. Además, una

característica del proceso revolucionario es el esfuerzo hacia el desarrollo social, económico y cultural, encaminado a alcanzar la calidad de vida a la que repetidamente se ha referido la Asamblea General en su análisis del derecho al desarrollo. Todos los propósitos de desarrollo tienen como obstáculo el bloqueo económico, comercial y financiero que los Estados Unidos ha impuesto a Cuba por más de 30 años, bloqueo condenado por la Asamblea General, así como por numerosos gobiernos y organismos como el Parlamento Europeo, la Comunidad Económica Europea, el Grupo de los Ocho en América Latina y la Tercera Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

63. La Federación de Mujeres Cubanas se refirió también al tema del bloqueo señalando que éste ha ocasionado un estricto racionamiento de los alimentos y la carencia de artículos de aseo y uso personal, afectando seriamente la vida cotidiana de la familia cubana. La inclusión de aspectos tan sensibles como son precisamente los alimentos y las medicinas atenta gravemente contra los niveles de salud y bienestar social alcanzado por la población. Otro ángulo desde el que se aprecian los efectos del bloqueo es el referido a las negativas de visados. En muchas ocasiones se le ha negado por parte del Gobierno estadounidense la entrada al país a miembros de la Federación que han sido invitados por universidades, grupos y organizaciones de mujeres.

64. La Organización de Solidaridad de los Pueblos de Africa, Asia y América Latina envió al Relator Especial una carta en la que se hace una breve historia del bloqueo económico de los Estados Unidos contra Cuba, bloqueo que ha significado para el pueblo cubano pérdidas materiales por más de 40.000 millones de dólares, así como se mencionan agresiones militares, terroristas y otros crímenes. Se refirió igualmente a los siguientes aspectos de la obra llevada a cabo por la revolución en Cuba: se garantiza el derecho a la vida, de tal manera que si en América Latina prevalecieran las condiciones de salud pública cubana se podría salvar la vida a 500.000 niños al año. Es el país del mundo con más maestros por habitante. La inmunización alcanzó al 95% de los niños. Enfermedades como la poliomielitis, difteria, tétanos, tos ferina, etc., se han erradicado y la tuberculosis se ha reducido considerablemente. La seguridad social garantiza el derecho de los jubilados a una vejez digna. Se eliminó el analfabetismo. El presupuesto destinado a educación es 20 veces más que en la época pasada y el de salud pública 50 veces más que en el período prerrevolucionario. En Cuba no se tortura ni hay desaparecidos en toda la historia de la etapa revolucionaria. El voto no es obligatorio, a pesar de lo cual la participación electoral es del 99% de los electores. El 40% de los trabajadores del país son mujeres, representando el 60% de los técnicos de nivel medio y superior. Al hacer propietarios de sus viviendas a los cubanos se eliminó de las ciudades el desahucio y al convertir en dueños de sus tierras a los campesinos se eliminó el desalojo en el campo. A los Estados Unidos le llevó 69 años pasar de una expectativa de vida de 60 años a 70 años; Cuba, en virtud de la revolución, la alcanzó en menos de la mitad de ese tiempo, logrando para el cubano una expectativa de 76 años.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

65. El Gobierno de Cuba continúa rechazando la decisión de la Comisión de Derechos Humanos de mantener bajo examen la situación de los derechos humanos en este país, así como toda colaboración con el Relator Especial. En este sentido se reproduce en el apéndice II el discurso pronunciado por el Representante Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas con fecha 29 de noviembre de 1993 en el curso del 48º período de sesiones de la Asamblea General. El Relator desearía apelar al Gobierno de Cuba una vez más para que revise esta postura y entre en un diálogo directo y franco sobre los fenómenos descritos y los casos específicos presentados en sus informes, así como cualquier otro aspecto relacionado con los derechos humanos. También desearía apelar al Gobierno para que le diera la oportunidad de visitar el país, como es práctica habitual en relación con los mandatos de la Comisión de Derechos Humanos.

66. No obstante, el Relator Especial recibió en el curso de 1993 comunicaciones de organizaciones e instituciones que tienen su sede en Cuba de acuerdo con la legislación vigente, el contenido esencial de las cuales está incluido en el presente informe (párrs. 59 a 64). Los argumentos de estas organizaciones se enfocan en los logros obtenidos en el área social y educacional, pero también señalan el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos hacia Cuba como el principal causante de las deficiencias económicas y de la falta de espacio para reformas políticas.

67. El presente informe centra su atención primordial en el análisis de denuncias recibidas en relación con la situación en materia de derechos civiles y políticos, y describe casos concretos de violaciones así como algunos aspectos relativos al marco constitucional y legal. A propósito de esto último el Relator Especial observa que la Constitución vigente en Cuba tiene como base, según se dice en el preámbulo, las ideas político-sociales de Marx, Engels y Lenin. Al igual que Cuba, un gran número de países tienen constituciones elaboradas sobre una base ideológica más o menos definida. No es tarea del Relator Especial, sin embargo, emitir opiniones en esta materia; su mandato se limita a analizar las consecuencias en materia de derechos humanos y libertades fundamentales de la interpretación y aplicación por las autoridades, en este caso cubanas, de la Constitución. En este sentido la crítica se centra, de manera primordial, en la falta de espacio con que cuentan los ciudadanos para canalizar y defender sus intereses y opiniones en los casos en que éstos no coinciden con la línea autorizada y mantenida por las fuerzas en el poder.

68. El informe se refiere también, en forma detallada al examen por parte de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, así como del Comité de Libertad Sindical, de la aplicación en Cuba de varios convenios no sólo por su relevancia sustancial sino también por tratarse de órganos con los cuales el Gobierno ha mantenido un diálogo. Además se recogen algunos datos sobre el desarrollo económico y social basados en información proporcionada a las Naciones Unidas por fuentes gubernamentales, el último informe sobre Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo e informes de fuentes no

gubernamentales, así como las comunicaciones recibidas de Cuba provenientes de las instituciones arriba mencionadas.

69. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Relator Especial considera necesario recomendar al Gobierno de Cuba la adopción de medidas dirigidas a:

- a) Ratificar los principales instrumentos de derechos humanos en que Cuba no es parte, en particular el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y sus Protocolos Adicionales y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
- b) Cesar en la persecución y castigo de los ciudadanos por motivos vinculados a la libertad de expresión y asociación pacíficas;
- c) Eliminar de la legislación todas aquellas disposiciones que implican discriminación entre los ciudadanos por motivos políticos, en particular en los ámbitos laboral y educativo, así como la adopción de medidas dirigidas a reparar en lo posible excesos cometidos en este sentido en el pasado, tales como la reintegración en anteriores puestos de trabajo a personas que fueron expulsadas de ellos.
- d) Permitir la legalización de grupos independientes, en particular los que buscan desempeñar actividades en el campo de los derechos humanos o sindicales, dándoles la posibilidad de actuar dentro del marco de la ley pero de manera independiente;
- e) Mayor respeto a las garantías del debido proceso, de conformidad con lo establecido en los instrumentos internacionales, adoptando en particular las medidas necesarias para hacer posible el acceso efectivo a la asistencia letrada de todas las personas sometidas a proceso sin ningún tipo de discriminación;
- f) Mayor transparencia y garantías en el sistema penitenciario, con el fin de evitar incidentes de excesiva violencia y sufrimiento físico dirigidos hacia la población penal. En este sentido constituiría un logro sustancial la renovación del acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja así como permitir el acceso a las prisiones a grupos nacionales independientes;
- g) Adopción de medidas destinadas a poner en libertad a todas aquellas personas que cumplen condenas por delitos con connotaciones políticas, así como por intentar abandonar el país de manera irregular;
- h) Eliminar las trabas administrativas existentes para la salida del país así como para la entrada de ciudadanos cubanos residentes en el extranjero.

70. A principios del mes de septiembre de 1993 los obispos de Cuba hicieron pública una amplia carta pastoral en la que se analizan varios aspectos de la situación social, económica y política del país. Además, el Relator Especial

recibió un documento suscrito por un conjunto de grupos considerados disidentes dentro de Cuba. En los dos casos se ennumeran una serie de propuestas dirigidas al Gobierno que se recogen a continuación y de las que el Relator Especial considera importante tomar buena nota, ya que estos textos surgen de una experiencia vivida y un contacto real y cotidiano con la realidad cubana.

71. La carta pastoral recoge, en particular lo siguiente:

"Nos parece que, en la vida del país, junto a ciertos cambios económicos que comienzan a ponerse en práctica, deberían erradicarse algunas políticas irritantes, lo cual produciría un alivio indiscutible y una fuente de esperanza en el alma nacional:

- 1) El carácter excluyente y omnipresente de la ideología oficial, que conlleva la identificación de términos que no pueden ser unívocos, tales como: patria y socialismo, Estado y Gobierno, autoridad y poder, legalidad y moralidad, cubano y revolucionario. Este papel, centralista y abarcador de la ideología produce una sensación de cansancio ante las repetidas orientaciones y consignas;
- 2) Las limitaciones impuestas, no sólo al ejercicio de ciertas libertades, lo cual podría ser admisible coyunturalmente, sino a la libertad misma. Un cambio sustancial de esta actitud garantizaría, entre otras cosas, la administración de la justicia independiente lo cual nos encaminaría, sobre bases estables, hacia la consolidación de un estado de pleno derecho;
- 3) El excesivo control de los Organos de Seguridad del Estado que llega a veces, incluso, hasta la vida estrictamente privada de las personas. Así se explica ese miedo que no se sabe bien qué cosa es, pero se siente, como inducido bajo un velo de inasibilidad;
- 4) El alto número de prisioneros por acciones que podrían despenalizarse unas y reconsiderarse otras, de modo que se pusiera en libertad a muchos que cumplen condenas por motivos económicos, políticos u otros similares;
- 5) La discriminación por razón de ideas filosóficas, políticas o de credo religioso, cuya efectiva eliminación favorecería la participación de todos los cubanos sin distinción en la vida del país."

72. Por su parte, el grupo de organizaciones disidentes menciona como plataforma común a todas ellas: amnistía para los presos por motivos políticos; reivindicación de las libertades de asociación, expresión, reunión y manifestación pacífica, prensa, sindicalización y para entrar y salir del país; abandono de toda forma de discriminación social y política; salvaguarda de la identidad, independencia y soberanía nacional. Además, estas

organizaciones, que se caracterizan por su modo de actuar pacífico, han mostrado su disposición para entablar un diálogo con las autoridades dentro de la legalidad.

73. El Relator Especial no cuenta con elementos suficientes para pronunciarse sobre si el sistema actual cuenta con un apoyo popular mayoritario o no, pero estima que el argumento de que este apoyo ha sido ampliamente expresado en recientes consultas electorales no resulta válido pues, dadas las condiciones en las que dichas consultas se celebraron, el electorado nunca tuvo la posibilidad de pronunciarse entre verdaderas opciones. Sólo después de haberse creado las condiciones para garantizar el derecho de opinión y expresión se podría obtener un reflejo válido de las preferencias del electorado con relación a diferentes opciones.

74. En un contexto internacional las medidas más constructivas para lograr una mejora en la situación de los derechos humanos en Cuba, en opinión del Relator Especial, deberían tener, como punto de partida, la eliminación lo antes posible de los residuos de la guerra fría en relación con Cuba, tratando más bien de promover el retorno de este país al sistema regional y global de colaboración y de solución de conflictos. El Relator tiene la impresión de que, en la actualidad, se están comenzando a adoptar algunas tímidas medidas en el sentido de entablar una mayor confianza entre Cuba y sus vecinos, principalmente los Estados Unidos, lo cual puede tener una repercusión favorable en materia de derechos humanos.

75. El papel de Cuba en el contexto de la guerra fría ha desaparecido, así como se ha evaporado la ayuda económica que antes recibiera de la antigua Unión Soviética. Cambios fundamentales en el funcionamiento de la economía doméstica son más decisivos que cualquier otra medida para que la nación sea capaz de proveer en favor de sus propios ciudadanos. Para evitar rupturas traumáticas y costosas estos cambios deberían producirse sin demora. La comunidad internacional debe alentar un programa de reformas dirigido a mejorar la productividad y eficiencia en la economía. Tales reformas necesariamente supondrían una ampliación del espacio en que funcionan las fuerzas de mercado, así como mayor libertad empresarial. El Relator Especial opina que los estímulos, o como mínimo una política que no obstaculice cambios en el sistema vigente, más que la presión o condicionamiento externo resultarían en reformas con tendencia liberalizadora no únicamente en el campo económico, sino también en la vida política. Esta opinión no es compartida por todos aquellos que se preocupan por el futuro de Cuba, pero sí están ganando fuerza los argumentos en favor de la supresión del embargo, no solamente en círculos industriales y económicos así como académicos sino también en círculos políticos en donde existe una preocupación por la población cubana y por el futuro del país.

Notas

- 1/ A/CONF.157/23.
- 2/ A lo largo del presente informe se usan los nombres de los grupos y los cargos dentro de ellos de la manera como fueron comunicados al Relator Especial por fuentes no gubernamentales.
- 3/ Conferencia Internacional del Trabajo, 79ª reunión, 1992, Informe III (Parte 4A), Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (Ginebra, 1992), págs. 410 y 411.
- 4/ Ibid., 80ª reunión, 1993, págs. 361 y 362.
- 5/ Ibid., pág. 364.
- 6/ E/CN.4/1993/39, párr. 57.
- 7/ Oficina Internacional del Trabajo, 287º informe del Comité de Libertad Sindical (GB.256/7/12).
- 8/ El País, 7 de noviembre de 1993.
- 9/ Sobre este caso véase E/CN.4/1993/39, párr. 54 b).
- 10/ Conferencia Internacional del Trabajo, 79ª Reunión, 1992, ..., pág. 409.
- 11/ Ibid., 80ª reunión, 1993, pág. 363.
- 12/ E/CN.4/1989/46, párrs. 124, 128, 130, 143 y 144.

Apéndice I

CARTA DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 1993 DIRIGIDA AL REPRESENTANTE
PERMANENTE DE CUBA ANTE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS
EN GINEBRA POR EL RELATOR ESPECIAL

Tengo el honor de referirme a la resolución 1993/63 adoptada por la Comisión de Derechos Humanos el 10 de marzo de 1993 titulada "Situación de los derechos humanos en Cuba". Como usted sabe, esta resolución fue aprobada por el Consejo Económico y Social mediante su decisión 1993/274, confirmándose así la prórroga del mandato del Relator Especial por un año más.

En el párrafo 2 de la resolución 1993/63 la Comisión pide al Gobierno de Cuba que dé al Relator Especial la oportunidad de cumplir plenamente su mandato, en particular permitiéndole visitar Cuba, y en el párrafo 7 pide al Relator Especial que mantenga contacto directo con el Gobierno y los ciudadanos de Cuba. En cumplimiento de estas disposiciones me corresponde dirigirme a usted para pedir la colaboración de su Gobierno en el desempeño de mi mandato, inclusive la oportunidad de visitar Cuba, para poder comprobar de manera directa la situación en materia de derechos humanos.

(Firmado): Carl-Johan GROTH
Relator Especial sobre la situación
de los derechos humanos en Cuba

Apéndice II

DISCURSO PRONUNCIADO CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 1993 POR
EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE CUBA ANTE LAS NACIONES UNIDAS
EN EL CURSO DEL 48° PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

Señor Presidente:

Hace 35 años Cuba era una neocolonia de los Estados Unidos de América, donde un régimen represivo, con pleno conocimiento y apoyo de ese Gobierno, violaba brutalmente los derechos humanos de nuestro pueblo. En la Embajada estadounidense se decidían los destinos del país y más de 20.000 cubanos fueron asesinados o desaparecidos y muchos miles más torturados con el asesoramiento de instructores norteamericanos.

Era el resultado de más de un siglo de geopolítica y de cinco intervenciones militares de los Estados Unidos. Fue necesaria la revolución popular de 1959 para alcanzar la independencia nacional, asegurar el respeto de los derechos humanos, establecer un sistema democrático y poner en ejecución un proyecto de desarrollo que respondiese a las aspiraciones del pueblo.

En las últimas tres décadas, los Estados Unidos han mantenido una política de hostilidad y agresiones contra Cuba, encaminada a subvertir y desestabilizar a la sociedad cubana para privar nuevamente a nuestro pueblo del ejercicio de su soberanía, su libertad y su independencia y restaurar la antigua dominación norteamericana sobre nuestro país.

Esa política transgresora de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, ha incluido incesantes esfuerzos para estrangular económicamente a Cuba desde el exterior mediante el bloqueo económico, comercial y financiero que aún sigue vigente y se recrudece; una agresión mercenaria que fue en su momento derrotada y la constante amenaza militar que es asistida por la presencia ilegal de una base militar en territorio cubano; actividades de sabotaje económico y terroristas, entre las que figuran también numerosos intentos de asesinato contra líderes cubanos; transmisiones ilegales y subversivas de radio y televisión; y permanentes campañas de desinformación y propaganda para confundir a la opinión pública mundial.

Cuba ha expresado su disposición a trabajar por un futuro, que incluye las relaciones normales y de cooperación con todos los Estados sin excepción alguna, y ha evidenciado su disposición al diálogo respetuoso en igualdad soberana.

Sin embargo, terminada la guerra fría, Estados Unidos recrudece su política anticubana, evidentemente obsoleta, de doble moral e ineficacia práctica en el empeño de quebrar la voluntad de resistencia de nuestro pueblo.

No se puede ignorar que nuestra vida nacional durante las últimas tres décadas, y aun en el presente, ha venido marcada por la circunstancia excepcional de tener que enfrentar esa poderosa amenaza a nuestra existencia como nación, que ha planteado la política de los Estados Unidos contra Cuba.

Lo único que explica la continuidad de la revolución cubana en tales condiciones es el apoyo y la participación de la inmensa mayoría del pueblo en ese esfuerzo de resistencia nacional.

Es por ello que hoy el Gobierno y el pueblo cubanos pueden mostrar al mundo, con legítima satisfacción, que se encuentran enfrascados en un titánico esfuerzo por preservar los enormes logros alcanzados en la esfera de los derechos humanos. No sólo de los derechos económicos, sociales y culturales que pocos se atreverían a cuestionar, sino también de la profundización y ampliación de las formas de participación democrática en los destinos del país y del disfrute de los derechos civiles y políticos.

Los derechos a la vida, al trabajo, a la educación, a la salud y a la seguridad social están garantizados para todos los ciudadanos sin distinción alguna. Cuba puede exhibir una limpia ejecutoria de pleno disfrute de los derechos humanos e índices de desarrollo social entre los más altos del mundo.

Las nuevas circunstancias internacionales y la reinserción de la economía cubana en el mercado mundial, nos han llevado a un proceso profundo y audaz de transformaciones.

La apertura al capital extranjero en los diferentes sectores de la economía, la ampliación del sector privado, la libre circulación de divisas, el incremento de la cooperativización de la agricultura y los pasos de reorganización gubernamental definen los cambios significativos realizados en los últimos años.

En la esfera política, han estado acompañados por una reforma que amplió los derechos recogidos en la Constitución aprobada en referendo por el 97% de los cubanos. Fue promulgada una nueva ley electoral que estableció elecciones libres y de primer grado para elegir al parlamento, mediante candidatos nominados directamente por los electores.

En 1993 realizamos las elecciones más abiertas y participativas de toda la historia de Cuba ante miles de invitados, periodistas y turistas extranjeros, en las que participó el 99% de los electores y el 93% de ellos ratificó con su voto libre y secreto el apoyo al proyecto nacional elegido, en lo que ha sido justamente calificado por las agencias de prensa como un verdadero plebiscito.

La manipulación con fines políticos de los derechos humanos y las campañas calumniosas dirigidas a presentar un cuadro de violación de los derechos humanos en Cuba, son un recurso de la política norteamericana dirigida a presionar por la fuerza cambios internos, favorecer la subversión y la desestabilización y crear un clima internacional favorable para intensificar el estrangulamiento de mi país, sin descartar descabellados estudios y recomendaciones apocalípticas de instituciones del Gobierno de los

Estados Unidos, acerca de la creación de un escenario propicio para la llamada injerencia humanitaria, ante supuestos y deseados conflictos civiles y desórdenes internos en Cuba.

Las acciones del Gobierno de los Estados Unidos, pretextando una preocupación por los derechos humanos, no son sino otra faceta de esa agresiva y hostil política, con la que busca someter y amputar nuestra identidad nacional. Esto es lo que verdaderamente motiva sus acciones y nadie debe llamarse a engaño, pues lo que está bajo ataque es la existencia misma de Cuba como nación.

Una vez más, las Naciones Unidas se ven obligadas a un ejercicio estéril, como resultado de la insistencia de Estados Unidos en una resolución calumniosa sobre un informe gris y ambiguo de un llamado relator especial.

La supuesta situación de los derechos humanos en Cuba se fabricó, en estricta verdad histórica, como resultado de la manipulación política del Gobierno de los Estados Unidos, que impuso en Ginebra el mecanismo especial de observación de los derechos humanos, aplicado en el caso de mi país de manera selectiva y discriminatoria.

Este mecanismo surgió viciado de origen, como todos saben, por la violación flagrante de todos los procedimientos existentes, la utilización indebida y deshonesta de precedentes relativos a otras situaciones y la falta total de fundamento en las labores previas de los órganos relevantes. Es por ello que estamos en un escenario de montaje artificial y bases ilegítimas, de nulidad absoluta para Cuba en todos sus aspectos de hecho y de derecho.

La realidad es que, para alcanzar su objetivo de manipular los mecanismos y procedimientos de derechos humanos de las Naciones Unidas y convertirlos indebidamente en un arma de su política hacia Cuba, los Estados Unidos han recorrido hasta aquí un tortuoso camino, mediante pasos sucesivos y deliberados que han violado de forma creciente los principios y normas que rigen el funcionamiento de la Organización. Como oportunamente ha denunciado mi país frente a cada uno de ellos, esos pasos han carecido invariablemente de fundamento y justificación en los hechos.

Como muchos han apreciado, el informe del llamado relator y su tibia presentación ante esta Comisión, no reflejan ni pueden reflejar en modo alguno un cuadro de violaciones que no existen. A pesar de ello, el informe está muy lejos de la verdadera realidad de Cuba, al mismo tiempo que la resolución que se impone está muy lejos de la situación que aquél describe. Con ello, la delegación de los Estados Unidos hace gala una vez más de los malabarismos a los que nos tiene acostumbrados para continuar impulsando artificialmente esta cuestión.

Cuba declara que no reconoce ni reconocerá en absoluto ningún espurio procedimiento selectivo y discriminatorio en el tema de los derechos humanos y, al mismo tiempo, compromete su cooperación, ya tradicional, con los mecanismos y procedimientos aplicados a todos los Estados en materia de promoción de los derechos humanos; y reitera su disposición a discutir

cualquier tema al respecto, en foros apropiados y sobre la base de la igualdad soberana y los principios de integralidad, universalidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos, como consagra la Declaración de Viena.

Mi país no tiene nada que temer ni de qué avergonzarse en la esfera de los derechos humanos. Pero no acepta ni aceptará en modo alguno someter su Constitución soberana, su ordenamiento jurídico propio, ni la organización política, social o económica que su pueblo libremente ha escogido, al escrutinio ilegítimo e injustificado de una gran Potencia.

Mi pueblo ha luchado durante más de un siglo, ha arrostrado graves peligros y pasa hoy verdaderos sufrimientos para preservar la independencia de la nación. Cuando la independencia se ha ganado así en los hechos, no se entrega en componendas políticas con quienes pretenden desconocerla.

El Gobierno de los Estados Unidos, promotor de la farsa que ha dado origen al titulado relator especial y su informe, carece totalmente de autoridad moral y política para erigirse en juez de los derechos humanos en Cuba. No sólo por ser un inveterado violador de derechos humanos en su propio territorio y por el sostén que ha dado a cuantas dictaduras militares y regímenes represivos han existido en la segunda posguerra, sino también y muy particularmente por el mantenimiento, sin razón alguna, del bloqueo económico, comercial y financiero contra mi país, que constituye una medida cruel e inhumana que viola flagrantemente los derechos humanos más fundamentales de mi pueblo, haciendo caso omiso de la voluntad expresada por la Asamblea General, que lo ha condenado por su carácter claramente violatorio de la Carta y del derecho internacional.

Si las circunstancias extraordinarias que enfrenta mi país se modificaran, si la hostilidad y el estrangulamiento fueran sustituidos por la actitud constructiva, si no se obstaculizara el camino de transformaciones que soberanamente hemos escogido, surgiría una situación cualitativamente nueva y favorable, desde cualquier punto de vista honesto, para el disfrute más pleno de los derechos humanos.

En cualquier caso, por encima de aquéllos que hoy nos acusan, nuestro pueblo seguirá siendo fiel al ejemplo de José Martí y al pensamiento que nos legara cuando enunció la idea que, desde nuestra Constitución soberana, preside la República independiente: "Con todos y para el bien de todos".

Muchas gracias.